Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **02938/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **XXX XXX**, en lo sucesivo, el **RECURRENTE**; en contra de la respuesta del **Partido Acción Nacional**, en adelante, el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El **ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés**, el particular presentó,a través del SAIMEX, la solicitud de información pública registrada con el número **00040/PAN/IP/2023,** mediante la cual requirió lo siguiente:

*“Clasificación administrativa, funcional y económica del gasto ejercido en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comite Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total del partido en el Comite Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades especificas en el Comité Directivo Estatal. Número de personas que laboran en el Comité Directivo Estatal, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salario mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad en el Comité Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comité Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comité Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comité Directivo Estatal. Número de vehículos automotores con que cuenta el Comité Directivo Estatal, marca, año, kilometraje, quien los tiene asignados y para qué actividades estan destinados. Clasificación administrativa, funcional y económica del gasto ejercido en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Directivos Municipales que comprenden el Estado de México. . Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total del partido en los Comités Directivos Municipales. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades especificas en los Comités Directivos Municipales. Número de personas que laboran en los Comités Municipales, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salario mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad en los Comités Directivos Municipales. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Municipales Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Municipales. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Municipales. Número de vehículos automotores con que cuentan los Comités Directivos Municipales, marca, año, kilometraje, quien los tiene asignados.”* (Sic).

1. Se hace constar que el entonces **SOLICITANTE** señaló como modalidad de entrega de la información**: *A través del SAIMEX.***

1. El **veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés**, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Naucalpan de Juárez, a 25 de mayo de 2023. Respuesta a Solicitud de Información. LIC. JUAN CARLOS JANDETTE DELGADO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. A través de este conducto le envió un cordial saludo, así mismo en atención a su escrito, con número de oficio CDE/UT/066/2023, mismo que se encuentra relacionado con la solicitud que emitió el Instituto de Trasparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (ITAIPEM) a través de su Plataforma del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense por sus siglas (SAIMEX), identificado con el número de folio 00040/PAN/IP/2023, en el cual insta la siguiente información: "Clasificación administrativa, funcional y económica del gasto ejercido en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comité Directivo Estatal?. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total del partido en el Comité Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021 y 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades específicas en el Comité Directivo Estatal. Número de personas que laboran en el Comité Directivo Estatal, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salarlo mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad en el Comité Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales por cada uno de los conceptos que lo compongan en los 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comité Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comité Directivo Estatal. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en el Comité Directivo Estatal. Número de vehículos automotores con que cuenta el Comité Directivo Estatal, marca, año, kilometraje, quien los tiene asignados y para qué actividades están destinados. Clasificación administrativa, funcional y económica del gasto ejercido en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Directivos Municipales que comprenden el Estado de México. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total del partido en los Comités Directivos Municipales. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades específicas en los Comités Directivos Municipales. Número de personas que laboran en los Comités Municipales, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salarlo mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad en los Comités Directivos Municipales. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Directivos Municipales. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Directivos Municipales. Gasto destinado y ejercido por el Partido Acción Nacional en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan en los años 2021, 2022 y los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023 en los Comités Directivos Municipales. Número de vehículos automotores con que cuenta los Comités Directivos Municipales, marca, año, kilometraje, quien los tiene asignados y para qué actividades están destinados. ” (SIC.) En atención a su solicitud, informo: En base al Artículo 158 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, que a continuación transcribo: "De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante". De tal manera, debido a la cantidad de información a procesar, pedimos amablemente al solicitante venir a nuestras oficinas, donde será conducida al almacén de archivo y realice de manera personal la búsqueda de la información solicitada. Sin otro particular, quedo de Usted.”* (Sic).

1. El **veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés**, la particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** mediante el recurso de revisión **02938/INFOEM/IP/RR/2023**; impugnación en la que refirió lo siguiente:

**Acto impugnado:**

*“La falta de entrega de la información solicitada”* (Sic.)

**Razones o motivos de la inconformidad:**

*“El responsable excusandose en la cantidad de información solicitada pretende que el solicitante acuda a sus oficinas a buscar la información solicitada, lo cual es un desproposito y se nota claramente que no tiene la menor intención de proporcionar la información, ya que esta se encuentra digitalizada, toda vez que así se entrega al INE”* (Sic.)

1. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente **02938/INFOEM/IP/RR/2023**; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala**, con el objeto de su análisis.
2. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la Ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de **treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX, a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara los Informes Justificados procedentes.
3. De las constancias que obran dentro del expediente digital, formado en el SAIMEX, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** no presentó su informe justificado para confirmar, modificar o revocar su respuesta original; en el mismo sentido, el **RECURRENTE** omitió el presentar cualquier tipo de alegatos o manifestaciones.

1. El **veinte (20) de agosto de dos mil veinticuatro**, este Organismo Garante se acercó a la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, vía correo electrónico, con la finalidad de requerir información adicional que justificara su pretensión de cambiar la modalidad de entrega de la información.
2. El **veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro**, el **SUJETO OBLIGADO** atendió el requerimiento de información, vía correo electrónico, mediante la entrega de los siguientes archivos electrónicos:
   1. ***“Oficio 072 UT PAN oficio Comisionada infoem.pdf”***: Documento de una foja consistente en el oficio CDE/UT/072/2024, de veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido a la Comisionada Ponente, por el que informa sobre el número de fojas que supone la información, su peso digital y el reporte de la incidencia realizada ante la Dirección General de Informática de este Instituto.
   2. ***“Contestación Registro de Incidencia.pdf”***: Documento de una foja consistente en el oficio INFOEM/DGI/619/2024, de veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por el Director General de Informática de este Instituto, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, por el que confirma el registro de la incidencia para dar atención al recurso de revisión **02938/INFOEM/IP/RR/2023**.
3. El **cinco (05) de septiembre de dos mil veinticuatro**, en el apartado de *Manifestaciones*, para mejor proveer, se compartieron los archivos proveídos por el **SUJETO OBLIGADO** en atención al requerimiento de información adicional elaborado por este Organismo Garante.
4. El **cinco (05) de septiembre de dos mil veinticuatro**, con fundamento en el artículo 181, tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se notificó que el plazo de 30 días para resolver el recurso de revisión sería ampliado por un periodo de 15 días hábiles adicionales.
5. Este Organismo Garante no pasa por alto explicar que, la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en que el alto número de recursos de revisión recibidos, ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
6. Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la Ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
7. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
8. En ese sentido, el Legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
9. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
   1. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
   2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
   3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
   4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.
10. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
11. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”[[1]](#footnote-1)*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
12. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
13. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.*** *“A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos.”[[2]](#footnote-2)*

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.*** *“En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.”[[3]](#footnote-3)*

1. Por ello, este Organismo Garante, comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. Finalmente, el **once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro**, se decretó el cierre de los periodos de instrucción, por lo que ordenó turnar los expedientes acumulados para su resolución, misma que ahora se pronuncia; y -----------------------

# **C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEX**,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de 15 días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que si el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el **veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés**, el plazo para interponer el recurso de revisión trascurrió del **veintiséis (26) de mayo** al **quince (15) de junio de dos mil veintitrés**; sin contemplar en el cómputo los sábados y domingos, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Luego entonces, si el recurso de revisión **02938/INFOEM/IP/RR/2023** se interpuso el **veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés**, éste se encuentra dentro del margen establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[4]](#footnote-4).
3. Por otro lado, de la revisión al expediente electrónico contenido en el SAIMEX**,** se desprende que la parte solicitante, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública en el expediente que se revisa, tanto en la solicitud de información como en el recurso de revisión, **no señaló su nombre, ni se tiene certeza de su identidad**; sin embargo, es importante señalar que el nombre de los Solicitantes y Recurrentes no es un requisito indispensable para la tramitación del acto procesal específico en materia de acceso a la información, ello en estricto apego al numeral 155 párrafo tercero de la Ley de la materia, en concatenación con el 180 del mismo ordenamiento.
4. Esto es así, ya que de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracciones III y IV de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones III, IV y V, de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**, se establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, además de que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal y Local.
5. Por lo cual, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al Solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
6. Asimismo, como lo establece la Convención Americana en su artículo 13, el derecho de acceso a la información es un derecho humano universal y en consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información.
7. De igual forma, la Corte Interamericana ha precisado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la Convención Americana.
8. Luego entonces, el nombre del **SOLICITANTE** y subsecuente **RECURRENTE** no puede ser considerado un requisito indispensable de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, ya que el acceso a la información no está condicionado a acreditar algún interés, ya sea jurídico o legítimo, máxime que es un elemento subsanable por este Órgano Resolutor.
9. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva los presentes recursos de revisión acumulados.

**TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se requirió diversa información relacionada con el ejercicio del gasto en diversos rubros durante los ejercicios dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés, por parte del Comité Directivo Estatal y los Comités Municipales.
2. El **SUJETO OBLIGADO** cambió la modalidad de entrega de la información a Consulta Directa o, *In Situ*.
3. El particular impugnó las respuestas del **SUJETO OBLIGADO** mediante recurso de revisión, y en el que señaló por agravios, que no se le entregó la información que solicitó.
4. En ese sentido, este Órgano Garante advierte que las razones o motivos de inconformidad manifestados por el **RECURRENTE** sugieren que la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con los principios contendidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señalan que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea **congruente**.
5. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** colma el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE** o, si por el contrario, se actualizan las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en el artículo 179 fracciones I y/o VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[5]](#footnote-5).

## **CUARTO. Estudio y Resolución del asunto.**

**I. Del deber de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública.**

1. Es elemental precisar que este Órgano Garante parte del hecho que el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México, por lo que al respecto el **SUJETO OBLIGADO** debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le imponen, en consecuencia, a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, según lo dispone el tercer párrafo del artículo primero de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** al señalar la obligación de “promover, **respetar**, proteger y **garantizar** los derechos humanos”, entre los cuales se encuentra dicho derecho.
2. Por ende, se deduce que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano convencional y constitucionalmente reconocido; en consecuencia, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo.
3. Así las cosas, podemos definir el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[6]](#footnote-6)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[7]](#footnote-7)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[8]](#footnote-8)* fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[9]](#footnote-9)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuyo objeto es establecer principios, bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados; en su artículo 176, establece que **el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública**, siendo éste el medio a través del cual, este Órgano Garante después de realizar el análisis al procedimiento de acceso a la información, podrá determinar la posible afectación y, de ser el caso, ordenar la reparación a la violación del derecho en cuestión.

**II. De la atención a la solicitud de información.**

1. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 150, establece que **el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión y se rige por los principios de** simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, **auxilio y orientación a los particulares**, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
2. Para atender las solicitudes de información, los Sujetos Obligados contarán con un área denominada **Unidad de Transparencia**[[10]](#footnote-10), la cual será presidida por un Titular, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad **será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información** y tendrá la alta responsabilidad de verificar, en cada caso, que la misma no sea confidencial o reservada. Asimismo, contará con las facultades internas necesarias para **gestionar la atención a las solicitudes de información** en los términos de la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[11]](#footnote-11).
3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las Unidades de Transparencia tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes:
   1. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
   2. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
   3. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada; y
   4. Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
4. Otros sujetos del proceso de atención a las solicitudes de información son los **servidores públicos habilitados**, quienes serán designados por el titular del **SUJETO OBLIGADO**, a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia[[12]](#footnote-12) y tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes[[13]](#footnote-13):
   1. Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia; y
   2. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia.
5. De tal manera que cada una de las áreas administrativas del **SUJETO OBLIGADO** deberá contar con un servidor público habilitado, quien será, a su vez, el enlace entre la Unidad de Transparencia y el área administrativa, y se encargará de buscar, localizar y proporcionar la información que se requiera a través de las solicitudes de acceso a la información.
6. Una expuesto lo anterior, de la lectura al contenido de la solicitud de información **00040/PAN/IP/2023**; y, como fuera señalado en el *Planteamiento de la Litis* de esta resolución, se advierte que el entonces **SOLICITANTE** requirió acceder a la siguiente información del periodo comprendido del uno (01) de enero de dos mil veintiuno al treinta (30) de abril de dos mil veintitrés:
   1. Del Comité Directivo Estatal:
      1. Calificación administrativa, funcional y económica del gasto.
      2. Gasto destinado y ejercido en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total.
      3. Gasto destinado y ejercido en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades específicas.
      4. Número de personas que laboran en el Comité, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salario mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad.
      5. Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.
      6. Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan.
      7. Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.
      8. Número de vehículos automotores con que cuenta el Comité, indicando la marca, año, kilometraje, quién los tiene asignados y para qué actividades están destinados.
   2. De los Comités Directivos Municipales:
      1. Clasificación administrativa, funcional y económica del gasto.
      2. Gasto destinado y ejercido en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total.
      3. Gasto destinado y ejercido  en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades específicas.
      4. Número  de personas que laboran en los Comités, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salario mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad.
      5. Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.
      6. Gasto destinado y ejercido  en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan.
      7. Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.
      8. Número de vehículos automotores con que cuentan los Comités, indicando su marca, año, kilometraje y quién los tiene asignados.
7. Por su parte, en respuesta a la solicitud **00040/PAN/IP/2023**; el **SUJETO OBLIGADO** cambió la modalidad en la entrega de la información mediante el siguiente pronunciamiento:

*“(…). En base al Artículo 158 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, que a continuación transcribo: "De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante". De tal manera,* ***debido a la cantidad de información a procesar, pedimos amablemente al solicitante venir a nuestras oficinas, donde será conducida al almacén de archivo y realice de manera personal la búsqueda de la información solicitada****. Sin otro particular, quedo de Usted.”* (Sic.)

(Énfasis añadido)

1. En consecuencia, toda vez que el **SUJETO OBLIGADO** se pronunció respecto de la información solicitada, resultaría conveniente obviar el análisis de competencia del Partido Acción Nacional para generar, administrar o poseer la misma, dado que éste asumió la competencia mediante su respuesta a la solicitud de información; tan es así que la Unidad de Transparencia la puso a disposición del particular en **Consulta Directa**.
2. Lo anterior encuentra lógica toda vez que el estudio de la naturaleza jurídica de la información pública solicitada tiene por objeto determinar si ésta la genera, posee o administra el **SUJETO OBLIGADO**; empero, en aquellos casos en que éste la asume, implica *de facto* que la genera, posee o administra. Por consiguiente, a nada práctico nos conduciría su estudio, ya que, se insiste, la información pública solicitada, relacionada con el ejercicio del gasto en diversos rubros durante los ejercicios dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés, por parte del Comité Directivo Estatal y los Comités Municipales,ha sido asumida por el **SUJETO OBLIGADO**.
3. Por su parte, el ahora **RECURRENTE** presentó el recurso de revisión con número al rubro citado, en contra de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, y en el que señaló por agravios lo siguiente:
   1. Que no se le entregó la información que solicitó.
4. Razón de lo anterior, se procederá a analizar la legalidad de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** en lo que se refiere al cambio de modalidad de la entrega de lo solicitado, a fin de determinar si éste se realizó apegado a derecho o, si por el contrario, procede la entrega vía SAIMEX.

**III. Del cambio de la modalidad de entrega de la información.**

1. En principio, es pertinente mencionar que si bien el ente recurrido asumió contar con la información solicitada al pretender un cambio de modalidad, el artículo 18 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que los Sujetos Obligados tienen el ineludible compromiso de documentar todos los actos que deriven de sus atribuciones, funciones y competencias considerando desde su origen la eventual publicidad de la información como a continuación se observa:

***“Artículo 18.*** *Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.”*

1. Por otro lado, de acuerdo con la multicitada Ley de Transparencia vigente en la entidad, se entiende que la información pública es toda aquella que sea generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los **SUJETOS OBLIGADOS**, misma que debe ser accesible de manera permanente a cualquier persona, siempre privilegiando el principio de máxima publicidad, como se prevé su artículo 4, segundo párrafo:

*“****Artículo 4.***

*(…)*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona,*** *en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el* ***principio de máxima publicidad*** *de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.”*

*(…)*

(Énfasis añadido)

1. En ese sentido, no debe de pasarse por alto para el **SUJETO OBLIGADO** que el principio fundamental del acceso a la información pública, es la **máxima publicidad**, el cual encuentra reconocimiento legal conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y los tratados internaciones de la materia en los que México sea parte; lo anterior de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:

*“****Artículo 8.*** *El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán conforme a los principios establecidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución Local y la presente Ley.*

***En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad,*** *conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución Local, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, atendiendo al principio pro persona.*

*Para el caso de la interpretación se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia y el derecho de acceso a la información.*

(Énfasis añadido)

1. Establecido lo anterior, el artículo 7 de la Ley antes citada señala que el Estado Mexicano garantizará el efectivo acceso a toda persona a la información en su posesión, como se aprecia a continuación:

“***Artículo 7.*** *El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, jurídico colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios.”*

1. Además, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé en su artículo 23, fracción VII, que son Sujetos Obligados a Transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos que obren en su poder:

***“Artículo 23.*** *Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:”*

(…)

***VII.******Los partidos políticos*** *y agrupaciones políticas, en los términos de las disposiciones aplicables;*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

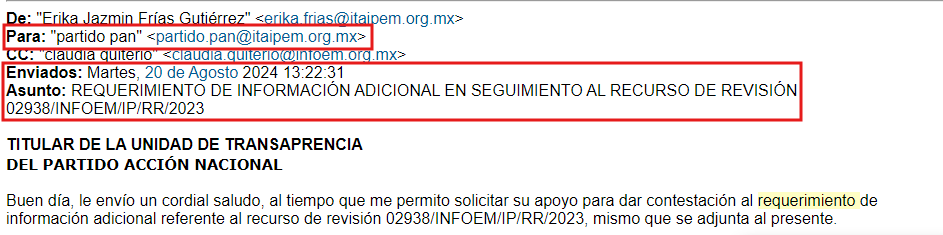
1. Una vez demostrada la procedencia del acceso en términos de la Ley de Transparencia Estatal, es indispensable traer a colación lo contenido en los artículos 158 y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señalan que:

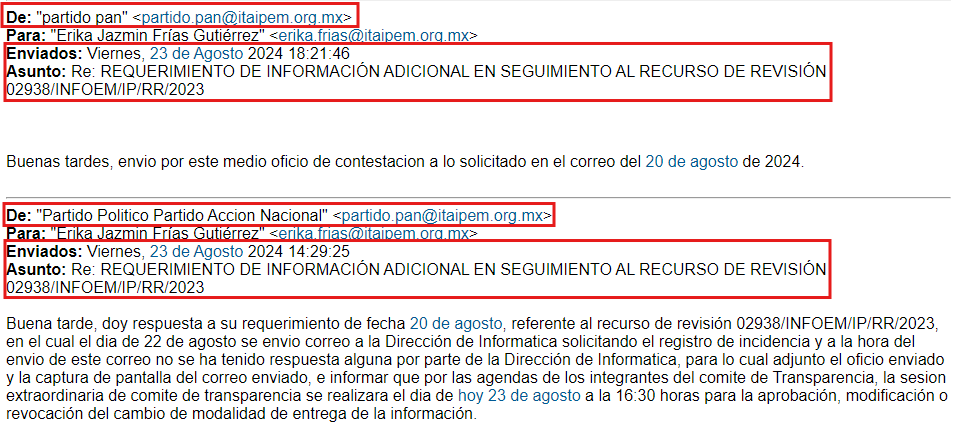
*“****Artículo 158.*** *De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada”.*

*“****Artículo 164.*** *El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad solicitada, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.*

*En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.”*

1. Del artículo 158 transcrito *supra*, se tiene que, **excepcionalmente**, en el caso de que la información solicitada implique un análisis, estudio o procesamiento de documentos, cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas administrativas y humanas del **SUJETO OBLIGADO**, éste podrá poder a disposición los documentos vía *In Situ* o Consulta Directa, **siempre y cuando se funden y motiven las razones que justifiquen la imposibilidad de entregar la información en la modalidad originalmente solicitada**.
2. Es decir, que del artículo anterior, se derivan tres hipótesis que, en su conjunto, y de manera fundada y motivada, validan el cambio de modalidad de entrega de la información y las cuales son, que las documentales a proporcionar **sobrepasen las capacidades técnicas, administrativas y humanas del SUJETO OBLIGADO**.
3. Para ello, cabe mencionar lo que se entiende por “***capacidad***”; que, de manera general, puede ser interpretado como la circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes que permiten el desarrollo o el cumplimiento de una función o desempeño de un cargo.
4. Respecto a las capacidades técnicas, el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), es el medio electrónico a través del cual se formulan las solicitudes de información pública y se interponen los recursos de revisión. De esta manera, tras registrar una cuenta en el sistema electrónico y realizar una solicitud de información, es posible darle seguimiento a la presentación, respuesta, inconformidad y resolución de ésta.
5. Ahora bien, en relación con **el peso máximo de archivos que soporta el SAIMEX para adjuntar como respuesta a las solicitudes de información**, de acuerdo con la Dirección de Informática de este Instituto, la plataforma **tiene el soporte tecnológico para que se puedan adjuntar archivos con un peso aproximado de hasta 500Mb o un equivalente de hasta 8,000 hojas**, garantizando que el ciudadano no tenga problemas en la descarga de la información, usando conexiones a internet convencionales bajo parámetros de escaneo en resolución máxima de 150Dpi’s, escala de grises y formato “PDF” extraído directamente del escáner.
6. Dicho lo anterior, de las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, y como fuera señalado en párrafos previos, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** respondió a la solicitud de información **00040/PAN/IP/2023** señalando al particular que **debido a la cantidad de información, el particular debía acudir a las oficinas del Partido Acción Nacional, donde sería conducido al almacén del archivo y, ahí, podría realizar de forma personal la búsqueda de la información solicitada**, lo cual implica una carga desproporcionada al **RECURRENTE**, pues no se le informó con exactitud las razones que justificaran la necesidad de cambiar la modalidad de entrega de la información, **ni se le informó sobre el domicilio donde se ubican las oficinas del SUJETO OBLIGADO**.
7. A raíz de lo anterior, en seguimiento a los principios[[14]](#footnote-14) de **eficacia** y **profesionalismo**, este Organismo Garante se acercó al **SUJETO OBLIGADO**, vía correo electrónico, a fin de requerir mayores elementos que justifiquen la necesidad de cambiar la modalidad en la entrega de la información requerida a través de la solicitud de información **00040/PAN/IP/2023**. Se adjunta la captura del correo electrónico enviado a la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO,** así como su respuesta, para efectos referenciativos:





1. Cabe mencionar que, en respuesta al requerimiento de información adicional, el **SUJETO OBLIGADO** presentó la copia digitalizada del oficio número CDE/UT/072/2024, de veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por el Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido elemental se transcribe en seguida:

*“Por medio del presente reciba un cordial saludo. En calidad del Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales del Partido Acción Nacional en el Estado de México, y derivado de su requerimiento de información adicional de fecha 20 de agosto de 2024, donde requiere informe lo siguiente:*

* + - * ***El cúmulo de información que representan los documentos, en una cantidad aproximada de fojas.***

*De tal manera informo que de los tres años fiscales que solicita el particular mas información adicional, los contadores del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México, dan un aproximado de 850 000 fojas que componen lo solicitado.*

* + - * ***El peso aproximado en Megabytes o Gigabytes:***

*En el tenor de la realización de un calculo aproximado del peso electrónico de todos los archivos o documentos que componen lo solicitado se calcula que tendrá un peso aproximado de un terabyte.*

* + - * ***Mayores elementos que brinden certeza sobre la imposibilidad técnica administrativa o humana de manera excepcional con los respectivos medios de convicción:***

*En ese sentido se informa que el Sistema de Acceso a la Información Pública Mexiquense (SAIMEX) no tiene la capacidad para la captura y envío del cumulo de información que se tendría que enviar por dicha plataforma.*

* + - * ***Realice el reporte de incidencias ante la Dirección de Informática, en el área de soporte técnico de este Instituto.***

*Sobre este punto informo a usted que se realizó el REGISTRO DE INCIDENCIA, mediante correo electrónico a la Dirección de Informática del INFOEM en fecha 22 de agosto de 2024, sin tener una respuesta por parte de la misma, sobre las constancias que integran al expediente del recurso de revisión 02938/INFOEM/IP/RR/2023, y que se desprende de la respuesta proporcionada a la solicitud de información pública con número de folio: 00040/PAN/IP/2023.*

* + - * ***Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual se apruebe ofrecer otros tipos de modalidad de consulta de información para el RECURRENTE.***

*Dando respuesta al ultimo punto solicitado doy cuenta que en fecha 23 de agosto de 2024, el Comité de Transparencia de este sujeto obligado llevo a cabo su segunda sesión extraordinaria, donde aprobó la modificación del cambio de modalidad de entrega de la información.”* (Sic.)

1. De las líneas transcritas *supra*, podemos rescatar los siguientes elementos:
   1. El **SUJETO OBLIGADO** reportó que la información solicitada ascendía a una cantidad **aproximada** de 850,000 fojas, lo que supone un peso **aproximado** de 3,000,000 de Megabytes o, lo que es lo mismo, tres Terabytes.
   2. Así mismo, informó que el veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós envió un correo electrónico a la Dirección General de Informática de este Instituto, con la finalidad de que fuera registrada la incidencia correspondiente.
   3. Finalmente, informó que el veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro, el Comité de Transparencia celebró su segunda sesión extraordinaria, en la que se aprobó el cambio de modalidad en la entrega de la información; sin embargo, no se hizo entrega del Acta o Acuerdo correspondiente.
2. Posteriormente, el **SUJETO OBLGIADO** presentó la copia del oficio número INFOEM/DGI/619/2024, de veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro, emitido por el Director General de Informática de este Instituto, y por el que confirma el registro de la incidencia correspondiente. Se comparte a continuación la captura del documento en cuestión:



1. De este modo, si bien es cierto que, en su respuesta inicial, el **SUJETO OBLIGADO** omitió justificar las razones que motiven el cambio en la modalidad de entrega de la información; también lo es que, una vez admitido el recurso de revisión, intentó perfeccionar su justificación mediante el señalamiento de los siguientes puntos:
   1. Informó el total de fojas aproximadas que suponía la información;
   2. Informó el peso digital aproximado que suponía la información;
   3. Entregó el oficio de la Dirección General de Informática de este Organismo Garante, en el que se confirma el registro de la incidencia para dar atención a la solicitud **00040/PAN/IP/2023**; y
   4. Señaló que su Comité de Transparencia, en su Segunda Sesión Ordinaria del presente año, confirmó el cambio de modalidad en la entrega de la información; empero, omitió proveer el Acuerdo o Acta que lo sustentara.
2. Ahora bien, en lo referente a la **capacidad administrativa**, ésta es definida como la habilidad institucional de un gobierno, para formular y realizar planes, políticas, programas, actividades, operaciones u otras medidas para cumplir con los propósitos de desarrollo. En palabras más simples, es la **eficiencia organizacional para efectuar funciones esenciales**.
3. La capacidad administrativa resulta ser un mandato para un gobierno eficaz, la cual engloba, previsión, organización, coordinación y control en actos y esfuerzos con la finalidad de cumplir con sus responsabilidades y funciones de manera eficaz, eficiente y sostenible.
4. Desde una perspectiva institucional, la **capacidad administrativa** es entendida como “*las habilidades técnico-burocráticas del aparato estatal requeridas para alcanzar sus objetos. En este componente se ubican el nivel micro y meso de la Capacidad Institucional. El* ***primero*** *hace alusión al individuo, al* ***recurso humano****. En el segundo nivel, se ubica la* ***capacidad de gestión****, el cual se centra en el fortalecimiento organizacional como área de intervención para construir capacidad; cultura organizacional, sistemas de comunicación u organización*” *[[15]](#footnote-15)*.
5. Hasta aquí, se tiene que la **capacidad administrativa** señala los recursos humanos y organizacionales, donde los organizacionales, además de englobar recursos humanos, engloban recursos materiales (espacio, equipos de cómputo, instalaciones, tecnología), financieros (ingresos) e intangibles (tiempo), los cuales en conjunto y a la medida correcta, alcanzarían que las instituciones logren la finalidad de cumplir con sus responsabilidades y funciones de manera eficaz y eficiente.
6. Por cuanto hace a las capacidades humanas, vale la pena precisar lo que se denomina por **recursos humanos**, lo cual podemos identificar como el conjunto de personas con las que cuenta una determinada organización, para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas.
7. Las personas son la parte fundamental de una organización, y junto con los recursos materiales, financieros e intangibles, conforman el “*todo*” que una organización necesita para el correcto funcionamiento, materialización y alcance de sus objetivos; los recursos deben coexistir uno con otro, de otra forma, el desarrollo no sería el apropiado y el cumplimiento de metas, inasequible.
8. Atendiendo a esta óptica, el **SUJETO OBLIGADO** no manifestó en su respuesta si afrontaba dificultades para entregar la información derivado de sus capacidades humanas pues, como ha sido reiterado a lo largo del presente estudio, fundó su necesidad en cambiar la modalidad por la imposibilidad de subir la información en el SAIMEX.
9. Así las cosas, el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, refiere que **se debe fundar y motivar la incapacidad técnica, administrativa y humana**. Empero, en el caso particular, el **SUJETO OBLIGADO** no externó ningún tipo de explicación que justificara incapacidad técnica, administrativa y/o humana, **dejando al RECURRENTE en un total estado de incertidumbre**.
10. Es así que el **SUJETO OBLIGADO** pretendió realizar el cambio de modalidad de entrega a vía *In Situ*, **sin antes proveer de otras modalidades digitales en las que también se pudiera otorgar la información** como, de manera enunciativa mas no limitativa, a través de un servicio de nube, correo electrónico, vía medio de almacenamiento como USB y/o CD-ROM, o bien, mediante copias simples o certificadas, con posibilidad de entrega en la Unidad de Transparencia, o a domicilio, por correo certificado, previo pago de los derechos correspondientes; contraponiéndose a la normatividad en materia y al Criterio número 8/2013 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, cuyo texto y sentido literal es el siguiente:

***CUANDO EXISTA IMPEDIMENTO JUSTIFICADO DE ATENDER LA MODALIDAD DE ENTREGA ELEGIDA POR EL SOLICITANTE, PROCEDE OFRECER TODAS LAS DEMÁS OPCIONES PREVISTAS EN LA LEY.*** *“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos.”*

1. Razón de lo anterior, este Organismo Garante determina conforme a derecho el **revocar** la respuesta proveída a la solicitud **00040/PAN/IP/2023**, a fin de **ordenar** la entrega de lo solicitado a través de otros medios electrónicos, tales como la puesta a disposición de la información en un servicio de nube que permita su descarga o mediante medios de almacenamiento masivo, como USB o CD-ROM, etc; o bien, mediante copias simples o certificadas, con posibilidad de entrega en la Unidad de Transparencia, o a domicilio, por correo certificado, previo pago de los derechos correspondientes.
2. Para tal efecto, el **SUJETO OBLIGADO** deberá informar al particular sobre la dirección y horarios de atención de la Unidad de Transparencia; el o los nombres del personal asignado quien le atenderá; el costo por los derechos de la reproducción y/o envío de la información; así como el plazo que estará disponible la información, en seguimiento a lo establecido por el artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. En ese sentido, de ser el caso que el **RECURRENTE** acuda con un medio de almacenamiento masivo propio, el **SUJETO OBLIGADO** deberá garantizar la entrega de la información de forma **gratuita** al no implicar ninguna erogación para éste.
4. Dicho lo anterior, no pasa desapercibido para este Órgano Garante, que la información que se ordena entregar puede contener información susceptible de clasificarse; para lo cual, el **SUJETO OBLIGADO** deberá atender al siguiente **Considerando**.

**QUINTO. De la versión pública.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitadaeventualmente pudieran obrar datos personales susceptibles de protegerse, y toda vez que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México tiene el deber de velar por la protección de los datos personales aun tratándose de servidores públicos y en su caso generar la versión pública de los documentos por las consideraciones que se estimen pertinentes. clasificación total o parcial de la información requerida, mediante solicitud de acceso a la información pública, constituye una restricción al derecho humano de acceso a la información. Actualmente, el grave problema que enfrentamos son los Acuerdos de Clasificación de la Información que emiten los Sujetos Obligados, ya que no observan los requisitos que deben de llevar a cabo para la realización de la clasificación de la información, tanto por la complejidad del procedimiento como por la falta de atención de los operadores jurídicos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **SUJETO OBLIGADO** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

**I. Del análisis de los datos susceptibles de ser protegidos.**

1. Bajo lo anterior, es importante analizar los datos personales susceptibles de ser protegidos, que pudieran estar contenidos en los **recibos de nómina** de los servidores públicos referidos en la solicitud de información, tales como **Registro Federal de Contribuyentes (RFC),** la **Clave Única de Registro de Población (CURP)**, la **Clave de ISSEMyM** u análogos, **préstamos o descuentos** realizados al servidor público y la **clave interbancaria de depósito.**

**a) Del Registro Federal de Contribuyentes.**

1. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave alfanumérica que se compone de trece (13) caracteres. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los dos primeros caracteres, corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primero nombre, seguido del año de nacimiento, mes y día, los tres últimos dígitos son la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2. Las personas físicas obligadas a presentar declaraciones o expedir comprobantes fiscales, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. La clave del RFC es el medio por el cual el Servicio de Administración Tributaria exige y vigila el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, además que identifica como contribuyentes a las personas físicas o morales en nuestro país.
3. Del mismo modo, el Registro Federal de Contribuyentes permite tener acceso a programas sociales o becas, obtención de créditos y apoyos, apertura cuentas bancarias, participar en Afores, e incluso es un requisito indispensable para realizar el trámite de ingreso a un empleo.
4. De lo anteriormente expuesto, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal concerniente a una persona física identificada o identificable, cuya exposición vulneraría la esfera privada del servidor público, e incluso pudiese dar pauta a la configuración de un delito fiscal.
5. En el mismo sentido, resulta aplicable el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

***REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DE PERSONAS FÍSICAS.*** *“El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”*

**b) De la Clave Única de Registro de Población.**

1. La Clave Única de Registro de Población (CURP) según lo establecido en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, la CURP es un elemento que permite registrar de forma individual a las o los mexicanos, así como a los extranjeros que se encuentren en condiciones de estancia regular en el país o en trámite de ésta, se integra por dieciocho (18) caracteres, los cuales son:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1. Es entonces que a partir de los datos básicos de la persona (nombre, apellido, sexo, fecha y lugar de nacimiento) encontrados en los documentos probatorios de identidad es que se genera la CURP, la cual tiene la particularidad de asegurar una correspondencia entre claves y personas.
2. Entre las características de la CURP, se encuentra:

***Composición.*** *Alfanumérica.*

***Longitud.***  *18 caracteres.*

***Naturaleza.*** *Biunívoca.*

***Universalidad.*** *Se asigna a todas las personas que conforman la población.*

***Verificabilidad. En su estructura existen elementos que permiten comprobar si fue conformada correctamente o no, así como fecha de nacimiento, sexo, identificad federativa de nacimiento y las primeras composiciones de la clave, conformadas por la letra inicial y primera vocal interna del primer apellido, la letra inicial del segundo apellido y la primera letra del nombre.***

1. Del mismo modo, los Lineamientos en comento señalan en su artículo Décimo Tercero, “Manejo de la Información” que la información contenida en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BNDCURP), tiene carácter de confidencial, por lo que su tratamiento debe ser acorde con la legislación aplicable y vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública, y protección de datos personales.
2. Es entonces que, de lo anterior, se desprende que la Clave Única de Registro de Población es un dato personal confidencial, ya que por sí releva información personal de su titular, y su exposición únicamente vulneraría la esfera privada del mismo, aunado a que no guarda relación con el desempeño profesional o laboral de un individuo ni con el ejercicio de recursos públicos.
3. Ante ello, resulta aplicable el Criterio 18/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la literalidad señala:

***CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP). “****La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”*

**c) Préstamos o descuentos de carácter personal.**

1. Para entender los límites y alcances de esta restricción, es oportuno traer a colación lo establecido por el artículo 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el cual señala que:

***“ARTÍCULO 84.*** *Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:*

***I.*** *Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;*

***II.*** *Deudas contraídas con las instituciones públicas o dependencias por concepto de anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;*

***III.*** *Cuotas sindicales;*

***IV.*** *Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;*

***V.*** *Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores públicos;*

***VI.*** *Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;*

***VII.*** *Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas;*

***VIII.*** *Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial; o*

***IX.*** *Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor público.*

*El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad judicial.”*

1. Como se observa, la Ley en mérito establece claramente cuáles son los descuentos o gravámenes que se relacionan con las obligaciones adquiridas como servidores públicos y aquellos que únicamente inciden en su vida privada. De este modo, los descuentos que no se relacionen con el gasto público o con el ejercicio de sus funciones, es información de carácter confidencial.

**SEXTO. Decisión.**

1. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **02938/INFOEM/IP/RR/2023**; por ello, y con fundamento en la fracción II del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **REVOCA** la respuesta a la solicitud de información número **00040/PAN/IP/2023**.
2. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **02938/INFOEM/IP/RR/2023** en términos de los **Considerandos** **CUARTO** y **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **REVOCA** la respuesta emitida a la solicitud de información número **00040/PAN/IP/2023** y se **ORDENA** al **Partido Acción Nacional** entregar, a través de medios electrónicos, tales como un servicio de nube, correo electrónico o, mediante medios de almacenamiento como USB y/o CD-ROM; o bien, Consulta Directa o mediante copias simples o certificadas, con posibilidad de entrega en la Unidad de Transparencia, o a domicilio, por correo certificado, previo pago de los derechos correspondientes, la siguiente información generada del uno (01) de enero de dos mil veintiuno al treinta (30) de abril de dos mil veintitrés:

* 1. **Del Comité Directivo Estatal:**

1. **Calificación administrativa, funcional y económica del gasto.**
2. **Gasto destinado y ejercido en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total.**
3. **Gasto destinado y ejercido en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades específicas.**
4. **Número de personas que laboran en el Comité, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salario mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad.**
5. **Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.**
6. **Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan.**
7. **Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.**
8. **Número de vehículos automotores con que cuenta el Comité, indicando la marca, año, kilometraje, quién los tiene asignados y para qué actividades están destinados.**
   1. **De los Comités Directivos Municipales:**
9. **Clasificación administrativa, funcional y económica del gasto.**
10. **Gasto destinado y ejercido en las distintas partidas que comprenden el presupuesto total.**
11. **Gasto destinado y ejercido  en las distintas partidas del financiamiento ordinario, extraordinario y para actividades específicas.**
12. **Número  de personas que laboran en los Comités, así como el nombre de cada uno de los empleados, su salario mensual bruto, bonos, compensaciones y demás conceptos que comprendan el sueldo en su totalidad.**
13. **Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.**
14. **Gasto destinado y ejercido  en el rubro denominado materiales y suministros, por cada uno de los conceptos que lo compongan.**
15. **Gasto destinado y ejercido en el rubro denominado servicios generales, por cada uno de los conceptos que lo compongan.**
16. **Número de vehículos automotores con que cuentan los Comités, indicando su marca, año, kilometraje y quién los tiene asignados.**

Para efectos de lo anterior se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII, y 132, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se ponga a disposición del **RECURRENTE**.

Así mismo, el **SUJETO OBLIGADO** deberá informar al particular, vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), sobre la fuente precisa de descarga (para el caso de que ésta se publique en un servicio de nube); o bien, sobre la dirección y horarios de la Coordinación de Transparencia, el o los nombres del personal asignado quien le atenderá, el costo por los derechos de la reproducción y/o envío de la información, así como el plazo que estará disponible la información, en seguimiento a lo establecido por el artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el caso de que el **RECURRENTE** presente un medio de almacenamiento propio, el **SUJETO OBLIGADO** deberá garantizar la entrega de la información de forma gratuita.

**TERCERO.** Notifíquese al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, vía SAIMEX, la presente resolución, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO,** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese a la **RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**SEXTO.** Se hace del conocimiento de la **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO PARTICULAR CONCURRENTE EN LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “*El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia.*” [↑](#footnote-ref-1)
2. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351. [↑](#footnote-ref-2)
3. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350. [↑](#footnote-ref-3)
4. “***Artículo 178.*** *El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.*

   *(…)*” [↑](#footnote-ref-4)
5. “**Artículo 179.** El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:

   **I.** La negativa a la información solicitada;

   (…)

   **VIII.** La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;(…)” [↑](#footnote-ref-5)
6. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 50, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículo 51, Ídem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 58, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 59, Ídem. [↑](#footnote-ref-13)
14. “**Artículo 9.** El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

    (…)

    **II. Eficacia:** Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

    (…)

    **IX. Profesionalismo:** Los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada; y

    (…)” [↑](#footnote-ref-14)
15. Políticas Públicas y Cambio Climático. Angélica Rosas Huerta. Profesora- investigadora. Departamento Política y Cultura. División de Ciencias Sociales y Humanidades. [↑](#footnote-ref-15)